

Las estrategias «desde arriba» y «desde abajo» del movimiento de Hugo Chávez*

STEVE ELLNER pp. 73-93

Resumen

Se analiza el movimiento y la presidencia de Hugo Chávez desde la perspectiva de dos estrategias: «desde arriba», en la que el Estado y los partidos políticos buscan conservar el poder y servir como instrumento de cambio, y «desde abajo», activada por movimientos sociales y sectores no organizados de la población que promueven su propia agenda de transformación. A ese fin, se examinan el MVR, las organizaciones sociales chavistas, y las innovaciones en el campo de política económica, social y exterior. La coexistencia de ambas estrategias parece a veces un delicado acto de equilibrio, y ha generado tensiones dentro del movimiento. Pese a la radicalización del discurso y las acciones, no hay indicaciones de un cambio significativo a favor de uno u otro modelo en el futuro de corto o mediano plazo.

Palabras clave

Fenómeno Chávez / Antiimperialismo / Democracia radical

Abstract

The movement and presidency of Hugo Chávez are analyzed from two perspectives: the «up-down» strategy, where the state and the political parties seek to retain the power and be instrumental in the change, and the «bottom-up» approach, set in motion by social movements and non-organized sectors of the public with their own transformative agenda. The MVR, the «chavista» social movements and new developments in the field of economic, social and foreign policy are examined to that end. The coexistence of both strategies looks at times like an awkward balancing act, and has generated tensions inside the movement. Notwithstanding the radicalization of the discourse and actions, there is no indication of a significant change towards one or the other approach in the immediate or medium-term future.

Key words

Chávez phenomenon / Anti-imperialism / Radical democracy

* Traducción del inglés por Nora López para la *Revista Cuadernos del Cendes*.

Un análisis de la experiencia de la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela es esencial para entender las actuales relaciones entre naciones del norte y del sur y la viabilidad de formas de resistencia de las segundas contra la dominación de las primeras. En todo el Tercer Mundo tales luchas han sido propulsadas desde dos niveles: «arriba» y «abajo»; es decir, por el Estado y los partidos políticos que buscan obtener y conservar el poder (desde arriba), y por movimientos sociales y sectores no organizados de la población (desde abajo). El primer tipo de confrontación se centra en la declaración de «soberanía» por parte de los gobiernos. Este enfoque comprende políticas antiimperialistas y el reforzamiento de un bloque de naciones tercermundistas. Por lo general conduce a una «revolución de liberación nacional» en la cual un gobierno apoyado por un partido político bien institucionalizado, un movimiento sindical poderoso, y a veces un sector comercial nacional progresista, desempeña un papel intervencionista en la economía y se enfrenta a intereses foráneos. Antes del inicio de la globalización en los años ochenta, casi todos los que apoyaban un cambio político de gran alcance estaban a favor de una estrategia estatista en esos términos. Sin embargo, a partir de entonces analistas de la globalización de todo el espectro político vienen sosteniendo que una línea de acción realmente independiente por parte de Estados del Tercer Mundo está condenada al fracaso.

Una segunda arena de resistencia involucra agrupaciones y movimientos conectados horizontalmente, democráticos en lo interno, y estructurados en forma menos rígida que los partidos políticos y el Estado. Los autores «posmodernistas» que apoyan la primacía de esos movimientos sociales para realizar el cambio social descartan como inviable la declaración enérgica de independencia por parte de los gobiernos, tomando en cuenta las restricciones globales y el peligro de aislamiento internacional. Asimismo estiman que las estrategias estatistas son jerárquicas por naturaleza, y que, por consiguiente, tienen un potencial limitado para producir un cambio significativo y trascendental (Hardt, 2002: 114-115; Laclau, 1985). Los defensores del segundo enfoque, el del «movimiento desde abajo», consideran que los movimientos sociales autónomos y la gran cantidad de personas cuyas vidas cotidianas chocan con la lógica del sistema establecido (lo que en una obra fue denominado «la multitud») son más transformadores que los partidos políticos, independientemente de sus orientaciones ideológicas (Evers, 1985; Hardt y Negri, 2004).¹

Elementos importantes de ambos paradigmas parecen aplicables al caso venezolano. Chávez no solo se declaró «antiimperialista», sino que su defensa de la soberanía nacional ha determinado en gran parte su política externa. En estos términos, su gobierno ha dado

¹ Esta posición se remonta a los años ochenta, cuando los analistas latinoamericanos adoptaron la noción de los «nuevos movimientos sociales», desarrollada por el sociólogo francés Alain Touraine (1971), considerándolos como la más importante fuente de resistencia al sistema establecido.

pasos importantes para diversificar sus vínculos económicos y ha formulado posiciones consecuentemente independientes. Además, una meta del partido político de Chávez, el Movimiento Quinta República (MVR), es reforzar el gobierno institucionalmente ante el agudo conflicto que estalla inevitablemente como resultado de la ejecución de políticas antiimperialistas.

El paradigma «desde abajo» (*bottom-up*) también parece aplicarse al fenómeno chavista. En primer lugar, el discurso de Chávez empoderando las clases populares y atacando ferozmente a los burócratas es compatible con el enfoque desde abajo. En segundo lugar, el fomento de cooperativas y pequeñas empresas en escala masiva apunta en dirección de un modelo económico descentralizado, opuesto a las estructuras centralizadas de las grandes compañías. Además, el surgimiento de una confederación sindical izquierdista, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con dirigentes importantes que se ven a sí mismos como una vanguardia del movimiento chavista, implica autonomía del Estado y del partido: otra característica de la estrategia desde abajo.

Una tendencia final que favorece el enfoque desde abajo es el resentimiento que expresa una gran cantidad de chavistas —algunos de los cuales pertenecen a movimientos y organizaciones sociales— contra el MVR y los demás partidos aliados en la coalición gobernante. Desde el inicio de su campaña presidencial en 1997-1998, Chávez empleó un discurso antipartidista (como lo hizo también su principal contrincante, Henrique Salas Römer). A partir de entonces, las actividades de un bloque de simpatizantes de Chávez que no pertenecen a ningún partido han empoderado a sus miembros. Así, los chavistas no militantes tuvieron un papel crucial y eclipsaron al MVR cuando tomaron las calles y exigieron el regreso de Chávez a la presidencia cuando ocurrió el golpe de abril de 2002. Además, formaron estructuras independientes del MVR que dirigieron la campaña en oposición a la remoción del Presidente en el referendo revocatorio de agosto de 2004.

A más de esas dos estrategias, puede estar surgiendo un tercer patrón. En el esfuerzo por fortalecer el Ejecutivo como principal guardián de la soberanía nacional (la estrategia estadista), y de promover la democracia participativa (la estrategia «desde abajo»), es posible que hayan resultado debilitados los partidos políticos y otras organizaciones intermediarias. Como resultado, puede estar surgiendo una relación caudillo-masas entre Chávez y las clases populares.

En lo que sigue nos ocuparemos de las implicaciones de la «experiencia Chávez». Se intentará arrojar alguna luz sobre la influencia que puede tener el gobierno chavista en el resto del continente, especialmente en lo referente a ciertas políticas y enfoques que podrían ser adoptados por otros gobiernos; para esto comenzaremos por definir el modelo político y económico en surgimiento. La discusión de los rasgos sobresalientes del chavismo

tiene también como propósito determinar cuál de los dos enfoques formulados anteriormente resulta más aplicable al caso de Venezuela, y si los dos son complementarios y conciliables o una fuente de tensiones y contradicciones internas. Para comenzar ofrecemos un cuadro panorámico de las tres etapas de la presidencia de Chávez. A continuación examinaremos el MVR, las organizaciones sociales chavistas y las innovaciones en el campo de la economía y la política exterior, buscando dilucidar la significación del fenómeno Chávez en el contexto de las dos mencionadas formas de enfocar el cambio en América Latina.

Las tres etapas de la presidencia de Chávez

La primera campaña presidencial de Chávez, en 1997-1998, puso el acento en las reformas políticas por encima de otros asuntos y estableció la tónica para la primera y moderada etapa de su presidencia en 1999 y 2000. Su principal bandera electoral fue la propuesta de una asamblea constituyente, mientras se suavizaba el tono de demandas socioeconómicas más izquierdistas, tales como la reformulación de los términos de pago de la deuda externa. En 1999 la política venezolana se centró en la elección de la Asamblea Constituyente, la elaboración de una nueva Constitución y su posterior aprobación en un referendo nacional que se celebró en diciembre de ese año. Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez tomó un rumbo económico moderado con la escogencia como Ministro de Finanzas de Maritza Izaguirre, quien había desempeñado ese cargo durante el gobierno neoliberal previo de Rafael Caldera. Posteriormente, Chávez nombró al parlamentario del MVR Alejandro Armas, quien tenía nexos con intereses financieros, para presidir una subcomisión presidencial sobre seguridad social que propondría la privatización del sistema de pensiones.

Durante este periodo los chavistas adoptaron el concepto de «democracia participativa», el cual preveía la participación directa del pueblo en la toma de decisiones, como un antídoto al excesivo poder de las elites político-partidistas. Al proclamar la democracia participativa, la Constitución de 1999 puntualizó claramente la obligación del Estado de «facilitar» la participación ciudadana en la toma de decisiones (artículo 62). Igualmente puso fin a los subsidios a los partidos políticos y los obligó a celebrar elecciones internas para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular y para sus organismos de dirección (artículo 67). La democracia participativa quedó ejemplificada en el papel que desempeñaron los movimientos sociales al presentar 642 propuestas a la Asamblea Constituyente, más de la mitad de las cuales fueron incorporadas en la nueva Constitución (García-Guadilla, 2003:239-242).

Los más ávidos defensores de la democracia participativa argumentaban en favor de reemplazar la democracia representativa y de los partidos políticos por la participación popular directa (lo que podría llamarse *democracia radical*). El estilo de democracia que

propugnaba la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Constituyente era compatible con la orientación del «movimiento desde abajo» planteado en obras teóricas. El ataque de muchos partidarios de Chávez a todos los partidos políticos del país y a la «clase política» (refiriéndose a la dirigencia partidista en general) se prestaba a la democracia radical, favorable a poner los partidos en los márgenes del sistema político.

En el transcurso de la presidencia de Chávez, elementos de la versión radical de la democracia participativa, que es la que mejor representa la estrategia *desde abajo*, han resultado inoperantes. El epítome de la democracia radical fue la realización de asambleas de ciudadanos cuyas decisiones tenían un carácter vinculante, como lo establece el artículo 70 de la Constitución. En esos años, organizar «asambleas constituyentes» en el movimiento sindical, las universidades y la industria petrolera se convirtió en el lema de batalla chavista, pero la idea no se materializó. A principios de 2001, por ejemplo, cuando consejos de obreros elegidos en asambleas de bases intentaron desalojar sindicatos nacionales de sedes gremiales antichavistas que ellos habían tomado, fueron criticados por el liderazgo sindical chavista por su excesiva espontaneidad y falta de disciplina (Ellner, 2003:221). Una aplicación aún más problemática del principio de la democracia radical correspondió al artículo 350 de la Constitución, el cual garantiza a los venezolanos el derecho a desconocer «cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos». Cuando a principios de 2002 la oposición cuestionó la legitimidad del gobierno de Chávez, invocó este artículo para justificar la desobediencia civil y dirigió sus acciones a derrocar el gobierno.

La segunda etapa de la presidencia de Chávez comenzó en noviembre de 2001 con la promulgación de un paquete de cuarenta y nueve leyes especiales destinadas a revertir las tendencias neoliberales de los años noventa. Estas leyes indicaron una radicalización del gobierno de Chávez y el comienzo de su segunda etapa, la antineoliberal. Una nueva Ley de Hidrocarburos estableció la propiedad mayoritaria del Estado de todas las compañías mixtas a cargo de operaciones petroleras, a fin de revertir el programa neoliberal de la «Apertura Petrolera» de la administración Caldera. Otra ley mantenía el control del Estado sobre la seguridad social, descartando así los intentos de privatizar el sistema emprendido tanto por el gobierno de Caldera, como por la comisión encabezada por Alejandro Armas. Una tercera ley, la Ley de Tierras, estaba destinada a someter a parcelamiento las tierras subutilizadas.

La aprobación de las cuarenta y nueve leyes en 2001 refutó el argumento de que Chávez era un neoliberal disfrazado de revolucionario (v. Parker, 2005:40-43). Su supervivencia política desacreditó el mito promovido por el consenso de Washington de que en la era de la globalización cualquier desviación del modelo macroeconómico estaba destinada al fracaso. La significación de este cambio se ha visto magnificada por la posición cada

vez más hostil de Washington hacia Venezuela durante la administración Bush, incluyendo su apoyo al golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga general de 2002-2003.

La derrota del paro envalentonó el gobierno de Chávez para ir más allá del mero rechazo de las políticas neoliberales en curso. Comenzó una tercera etapa caracterizada por programas innovadores y el surgimiento de estructuras nuevas que desafiaban o complementaban las ya existentes. Por ejemplo, los programas de «misiones» en el campo de la salud y la educación funcionaban fuera de los ministerios. En forma similar, una cadena de mercados estatales denominados «Mercal» competía con el sector comercial privado. Al principio de esta tercera etapa Chávez declaró a su gobierno «antiimperialista», y para 2005 llamó a la definición y construcción del «socialismo del siglo XXI». Para ese momento muchos venezolanos dentro y fuera del movimiento chavista criticaron la estructura rudimentaria y la falta de mecanismos para asegurar la implementación exitosa de los programas y la aplicación de las políticas. Sea como sea, había comenzado a surgir un nuevo modelo económico y social, aunque el proceso carecía de consolidación. Examinar el papel del partido, del Estado y del bloque chavista que no milita en partidos es esencial para entender las nuevas orientaciones del Chavismo y las nuevas estructuras que han surgido.

El partido Movimiento Quinta República

Presidentes populistas tales como Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas y Getúlio Vargas, que introdujeron políticas antiimperialistas en sus respectivos países en los años treinta y cuarenta del siglo XX, se apoyaron en partidos políticos para sostener su posición frente a una acerba oposición de las fuerzas de la reacción. Chávez también reconoció la importancia de desarrollar un partido político fuerte para contrarrestar la capacidad de movilización de la oposición. Al hacerlo se diferenció del peruano Alberto Fujimori (con el que se le compara a menudo), quien en gran parte pasó por alto la organización partidista y dependió mayormente de aliados comerciales y militares.

La débil institucionalización del MVR lo ha circunscrito en gran medida a la arena electoral. El partido fue creado en 1997 como un instrumento para promover la candidatura presidencial de Chávez y por lo tanto carecía de vínculos con la sociedad civil (López Maya, 2003:110). Después de obtener el poder, hubo intentos de institucionalizarlo a través de diversos frentes tales como el Frente Constitucional de Trabajadores (FCT) y los «Círculos Patrióticos», los cuales eran células de nivel local constituidas por alrededor de nueve miembros. Con todo, los dirigentes laborales chavistas substituyeron el FCT con la Fuerza de Trabajadores Bolivarianos, que agrupaba trabajadores de dentro y fuera del partido, mientras que los Círculos Patrióticos fueron mayormente abandonados en favor de los «Círculos Bolivarianos», que tampoco tenían una relación especial con el MVR. Los líderes chavistas

defendieron esta decisión de crear frentes amplios fuera del MVR basándose en que garantizaban la autonomía del movimiento social e impedían el control partidista.

Las experiencias del MVR en el caso de elecciones internas para elegir las autoridades y candidatos del partido —tal como lo manda el artículo 67 de la Constitución— han tenido resultados mixtos. La elección más importante se realizó en abril de 2003 para elegir el comité ejecutivo nacional del partido: el Comando Táctico Nacional. En esa ocasión, la inmensa mayoría de los mil delegados a la Convención Nacional elegidos en comicios internos pertenecía al ala izquierda del partido liderada por el parlamentario William Lara, aunque los izquierdistas habían acusado a la tendencia opuesta (liderada por el militar retirado Luis Alfonso Dávila) de haber cometido un fraude electoral generalizado. A pesar de la superioridad de Lara en número de delegados, su esfuerzo por ganar el control del partido resultó frustrado cuando Chávez instó a la convención a elegir al ex militar Francisco Ameliach como Director General del partido. Sin embargo, desde entonces Lara ha opacado a Ameliach en el liderazgo nacional del MVR.

El resultado de la convención de 2003 puso de relieve dos obstáculos mayores para la democratización del MVR. En primer lugar, Chávez tiene la última palabra en todas las decisiones, una prerrogativa aceptada unánimemente por los miembros del partido. En segundo lugar, él privilegia a los militares nombrándolos para cargos importantes, siguiendo su estrategia de «alianza cívico-militar». Esos factores interfieren con la democracia partidista al igual que con la consolidación de tendencias internas que facilitarían el debate ideológico que tanto necesita el MVR.

La corriente militar del movimiento chavista incluye a varios gobernadores, y la lideriza el ex vicepresidente de la República y actual gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, quien es aliado de Ameliach. Los «izquierdistas» del MVR que se identifican con Lara insisten en que, con pocas excepciones (tales como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Baduel, y el ex presidente del Instituto Nacional de Tierras, Eliécer Otaiza), los líderes militares chavistas se resisten a una mayor radicalización y en algunos casos han mostrado un entusiasmo moderado por los programas sociales. El trato especial que se confiere a los militares obedece a un imperativo político: reforzar la tendencia pro Chávez dentro de las Fuerzas Armadas, y al hacerlo prevenir una posible estrategia opositora de promover enfrentamientos y desórdenes como un medio de incitar a los militares a dar un golpe de Estado.

Lara, Nicolás Maduro (ex presidente del Congreso y actual Canciller de la República) y otros líderes del MVR han expresado su apoyo a la transformación del partido, a fin de establecer vínculos más allá de la arena electoral (Lara, 2005:14-15). Estos dirigentes ven el Congreso Ideológico anunciado por Chávez, y que se celebraría después de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, como una oportunidad ideal para relanzar el

MVR y superar su falta de claridad ideológica. La corriente izquierdista confiaba en que la serie de expulsiones del MVR y la decisión simultánea de no volver a postular a ciertos parlamentarios para las elecciones de diciembre de 2005 formaban parte de una estrategia de «purgar» dirigentes de conducta ética cuestionable. Los izquierdistas llamaron a los presuntos oportunistas del MVR «vampiros», vinculando la corrupción con la tendencia «derechista» del partido que obstaculizaba una mayor radicalización.

Sin embargo, los izquierdistas sintieron que por razones estratégicas el partido tenía que posponer la guerra total contra la corrupción. Además, los líderes del MVR estaban renuentes a abrir el partido al debate ideológico, para evitar divisiones que podrían impedirle responder a los retos inminentes que enfrentaba. Su argumento central en el momento en que se escribía este texto es el mismo que ha prevalecido en la historia del partido. Desde su fundación, el MVR siempre ha enfrentado situaciones de «emergencia» debido a la serie de elecciones celebradas en 1999 y 2000, seguidas por la insurgencia promovida por la oposición. La meta anunciada por Chávez de obtener diez millones de votos en los comicios presidenciales de 2006, para lo cual debían servir como un trampolín las elecciones parlamentarias de 2005, amenaza con volver la atención nuevamente a la arena electoral. Dirigentes del MVR indican que esos retos apremiantes requieren que se pospongan las elecciones primarias, la aplicación de medidas ejemplares contra la corrupción y el debate ideológico abierto. Sin embargo, después de la resonante victoria de Chávez en el referendo revocatorio de agosto de 2004 y en las elecciones estatales y municipales tres meses después, los chavistas se encuentran en una posición cómoda con una oposición altamente desprestigiada y desmoralizada, por lo que la «fijación» con las batallas electorales parece infundada.

A pesar de que el MVR no ha abordado los retos de la democracia interna, la claridad ideológica y la corrupción, el partido es un soporte principal del gobierno de Chávez. Uno de sus logros más importantes ha sido mantener el control de la mayoría en el Congreso, lo que ha sido esencial para la supervivencia del gobierno. Además, aun cuando muchos seguidores del Presidente creen que el MVR tolera la corrupción dentro de sus filas, el partido recibió la mayoría aplastante del voto chavista en las elecciones municipales de agosto de 2005. Los dirigentes chavistas habían estructurado sus listas electorales de forma de permitir que las otras organizaciones de la coalición gobernante pudieran poner a prueba su respaldo lanzando sus propias listas de candidatos, pero ninguna de ellas tuvo buenos resultados. A pesar de la decisión de permitir múltiples listas, Chávez y otros líderes enfatizaron la necesidad de mantener la unidad y así insistieron en que todos los dirigentes del MVR respaldaran las de ese partido. Después de las elecciones municipales, una serie de dirigentes emevertistas, incluyendo a Gilmer Vilorio, gobernador del estado

Trujillo y miembro fundador del partido, fueron expulsados por apoyar una lista separada. Al hacer un llamado a la unidad, Chávez subrayó la importancia de evitar el debilitamiento del MVR, aun cuando ocasionalmente ha expresado impaciencia y decepción con la conducta oportunistas y la falta de disciplina de algunos de sus dirigentes. En contraste, con frecuencia alaba al Partido Comunista por su disciplina y el compromiso incondicional de sus miembros.

La debilidad organizativa del MVR abre un espacio para actores que tienen un papel principal en la orientación «de abajo a arriba», la cual privilegia los movimientos sociales autónomos y la participación directa de las bases de las organizaciones políticas y sociales en la adopción de decisiones. De hecho, el que el MVR evite formar vínculos formales con las organizaciones sindicales y sociales estaba destinado a respetar su autonomía, de conformidad con la «estrategia de abajo a arriba». Sin embargo, contrariamente a tal estrategia, las organizaciones sociales chavistas por lo general no han logrado alcanzar un estatus autónomo y además han tenido una corta existencia, como se verá a continuación.

Los movimientos sociales y el chavismo

El resentimiento contra el MVR, sus partidos aliados y los políticos chavistas que frecuentemente expresan los seguidores de Chávez no es usual en el caso de un movimiento izquierdista latinoamericano. Esos chavistas de base afirman orgullosamente que son independientes de cualquier partido político y también que no tienen ambiciones personales, a diferencia de los que participan en la política partidista. Muchos chavistas que no militan en partidos pertenecen a organizaciones sociales pro Chávez tales como los Círculos Bolivarianos, que durante los primeros años de la presidencia de Chávez mantenían discusiones sobre diversos asuntos políticos de actualidad, como la nueva Constitución de la nación.

Los Círculos y otras organizaciones han sido claves para convocar a las bases chavistas a participar en movilizaciones. Así, por ejemplo, mediante redes informales establecidas por organizaciones sociales y potenciadas con el uso de mensajes de texto de teléfonos celulares, un gran número de habitantes de barrios marginales convergieron en Miraflores en Caracas y en las bases militares de todo el país para reclamar el regreso de Chávez al poder cuando el golpe de abril de 2002. En forma significativa, la noticia de que Chávez no había renunciado sino que estaba prisionero, anunciada por una radio comunitaria de la organización católica Fe y Alegría, incitó a habitantes de las zonas de bajos ingresos del oeste de Caracas a unirse a las protestas. Un dirigente de una organización cultural que en 2004 convirtió una comisaría de policía del barrio «23 de Enero» en estación de radio comunitaria recuerda así los sucesos del 13 de abril: «Los miembros del grupo estaban

muy en contacto unos con otros y marchamos juntos a Miraflores; pero no había un comando central que moviera las cosas ese día» (Antonio Alvarado, entrevista, Caracas, 6 de octubre de 2005).

Las organizaciones sociales chavistas han tenido una vida corta: los Círculos Bolivarianos, que se basaban más que nada en las comunidades; la «Clase Media en Positivo», que agrupaba a profesionales y otras personas que vivían en zonas más prósperas; y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores que representaba a sindicalistas, prácticamente desaparecieron al ingresar sus miembros a otras organizaciones y participar en otras actividades dentro del movimiento chavista. A comienzos de 2004, algunas de esas personas se unieron a las «Unidades de Batalla Electoral» (UBE) que recorrieron los barrios solicitando que se votara «No» en el referendo que se celebró en agosto de ese año. Los miembros de las UBE estaban convencidos de que esa estructura en muchos casos liderada por chavistas no partidistas se mantendría en el tiempo y serviría para contrapesar la participación del MVR en la nominación de candidatos para las elecciones futuras. Sin embargo, las UBE también resultaron efímeras.

El reclutamiento de activistas políticos por parte del Estado, y las oportunidades que éste les brinda, explican en gran parte la corta duración de las organizaciones. El vaciamiento de las organizaciones sociales se exacerbó con los abundantes ingresos petroleros a disposición del Estado y la estrategia chavista de crear estructuras paralelas en los campos de la salud, la educación y la distribución de alimentos. En algunos casos, varios ministerios, así como algunos alcaldes y gobernadores chavistas, incorporaron a esos activistas a la administración pública, otorgándoles contratos y proporcionándoles capital inicial para formar cooperativas. La relación entre los activistas y el Estado algunas veces produjo tensiones dentro de las organizaciones sociales. El movimiento radical «Tupamaros», por ejemplo, que surgió en la zona oeste de Caracas en los años noventa, perdió una gran cantidad de miembros cuando decidió participar en la política electoral al mismo tiempo que uno de sus dirigentes principales aceptó un cargo en la policía de Caracas en 2004. Los disidentes acusaron a los dirigentes Tupamaros de transformar la organización en un partido político y comprometer así su estatus como movimiento autónomo.

El movimiento pro chavista mostró signos de haber alcanzado un grado de autonomía de los partidos políticos y del Estado. A pesar de sus tendencias internas en conflicto, la confederación sindical chavista, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), formuló propuestas, demandas y consignas que no fueron compartidas oficialmente por el MVR y sus partidos aliados. Por ejemplo, cuando se fundó en 2003, la UNT planteó la implementación de un modelo económico basado en la producción para el consumo interno, la reformulación de la deuda externa, y apoyo para la toma de empresas que habían cerrado, en un momento en que el gobierno aún no había definido su posición (Ellner, 2005b:66). El hecho de que esos

sindicalistas se autopercibieran como una vanguardia dentro del chavismo refuerza la noción de autonomía del movimiento social que es piedra angular del «enfoque desde abajo».

El grado de autonomía generalmente bajo que han mostrado los movimientos sociales durante el gobierno de Chávez no es atípico para América Latina. El enfoque «desde abajo» favorece la maximización de la autonomía, y esto fue prácticamente una bandera durante los años ochenta, cuando autores influenciados por el sociólogo francés Alain Touraine proclamaron que los «nuevos movimientos sociales» eran la ola del futuro. Sin embargo, más recientemente estudios de gobiernos izquierdistas locales y estatales realizados en Brasil, en Lima durante los ochenta, y en otros países, han documentado los intrincados problemas y desafíos que enfrentan los movimientos sociales al definir su relación con los partidos políticos y el Estado, incluso cuando los que están en el poder manifiestan su respaldo a la democracia participativa. Por ejemplo, un estudio de la alcaldía del izquierdista Alfonso Barrantes en Lima señala cómo los movimientos sociales que participaron en programas municipales tuvieron que lidiar con la reducción del financiamiento por parte del gobierno central, con acusaciones de corrupción que fueron explotadas por el movimiento guerrillero Sendero Luminoso para desacreditarlos, con la extrema pobreza de sus miembros que obstaculizaba su participación y compromiso, y con los imperativos políticos percibidos por la izquierda, que limitaban la autonomía y las opciones.² En Venezuela, estando el gobierno central comprometido con la participación popular en la adopción de decisiones, como establece la Constitución de 1999, los movimientos sociales chavistas estaban aparentemente en una posición ventajosa en comparación con sus contrapartes de otros países. Sin embargo, el hecho de que el MVR no tratara de acercarse a ellos —en sí una reacción extrema a las prácticas partidistas hegemónicas del pasado— los privó de vínculos institucionales que habrían facilitado su participación en la toma de decisión.

La transformación económica y los programas sociales

Durante los primeros cuatro años de la presidencia de Chávez, el pensamiento tras la política económica de su gobierno se definía mejor teniendo en cuenta a qué se oponía, en lugar qué propugnaba. De hecho, sus adversarios afirmaban que él era en realidad un

² Sin embargo, el autor Gerd Schönwälder acredita a los movimientos sociales el haber supervisado programas del Estado y, en este proceso, haber mejorado la eficiencia y la rendición de cuentas. Además, influyeron en los partidos de izquierda para que abandonaran el vanguardismo que caracterizó su conducta durante la década previa (Schönwälder, 2002:187). Tanto este autor como Hilary Wainwright (en su libro sobre las experiencias de los movimientos sociales en Brasil y otras partes) ensalsan estos movimientos al tiempo que critican implícitamente el paradigma antipartidista de los nuevos movimientos sociales (NMS). En esa línea, Schönwälder rechaza el concepto de autonomía absoluta de los movimientos sociales y sostiene también que las identidades de los movimientos que enfatizan los autores que defienden los NMS nunca son estáticas sino que están sujetas a demandas y luchas cambiantes (ibid., pp. 19-20, 29). Wainwright sostiene que la democracia participativa debe complementar antes que reemplazar la democracia representativa. Igualmente se refiere al creciente número de partidos políticos que reconocen la importancia de —y se comprometen con— no manipular los movimientos sociales (Wainwright, 2003:186, 198).

neoliberal, como lo demostraban sus conservadoras políticas fiscales (Blanco, 2002:139). Sin embargo, el hecho de que detuviera los anteriores esfuerzos de privatización de las industrias del petróleo y el aluminio y el sistema de seguridad social, y que no accediera a las presiones de la oposición para que se llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (Wilpert, 2003:169), establecieron sus credenciales como antineoliberal. En forma similar a la situación en que se encontraron al comienzo gobiernos de centroizquierda tales como el de Caldera en 1994 (Venezuela), Fernando de la Rúa (Argentina) y Ricardo Lagos (Chile), Chávez no logró definir su antineoliberalismo en lo específico, ni diferenciar sus políticas de aquellas de la sustitución de importaciones que se aplicaban en el pasado (Ellner, 2005a:47-51).

Con la derrota del paro general de dos meses en febrero de 2003 disminuyó la presión sobre Chávez, haciendo posible la aplicación de leyes y la implementación de programas y prácticas sociales que apuntan en la dirección de nuevos contornos para un modelo económico. Muchos aspectos de la orientación de este nuevo gobierno, tales como el foco en la comunidad y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, se amoldan al paradigma «desde abajo». Sin embargo, al mismo tiempo los intentos del gobierno de alcanzar la autosuficiencia en producción de alimentos por razones de seguridad nacional, y sus rígidas condiciones para el capital extranjero, concuerdan con el modelo estatista antiimperialista.

Las actividades patrocinadas por el gobierno que se mencionan a continuación, si bien se inspiran en prácticas del pasado, ponen en evidencia nuevas metas y focos de atención:

1. *Los programas de «misiones»*. El gobierno ha establecido programas especiales fuera de las estructuras ministeriales y jurídicas existentes, principalmente en todos los niveles de los campos de la salud y de la educación. Estos programas emplean técnicas innovadoras tales como el uso de video cassettes y facilitadores en lugar de maestros en el aula. Además, doce mil médicos cubanos iniciaron la misión «Barrio Adentro» estableciendo consultorios en barrios marginales de todo el país, y ahora están siendo reemplazados gradualmente por joven personal médico venezolano. En 2005 el gobierno anunció formalmente que los 1,5 millones de analfabetos del país habían aprendido a leer y escribir a través de la misión «Robinson».

2. *Las cooperativas de trabajadores*. El Ministerio para la Economía Popular (Minep), la empresa petrolera estatal (Pdvs) y otras compañías del Estado, varios bancos estatales y algunas administraciones de los estados y municipios del país han estimulado la creación de docenas de miles de cooperativas, proporcionándoles el capital inicial y organizando sesiones de entrenamiento. El Minep, fundado en 2004 y encabezado por Elías Jaua, anterior activista de una organización política de ultraizquierda, dirige la mayoría de esos es-

fuerzos. Facilitadores del Minep —por lo general con título universitario o técnicos superiores— asisten cada uno a dos cooperativas para ayudarlas a solucionar los problemas que surjan y monitorear las actividades. En mayo de 2005, trescientos mil trabajadores desempleados se graduaron del programa de entrenamiento «Vuelvan Caras» patrocinado por el Minep, y muchos de ellos formaron después cooperativas, tanto en áreas urbanas como rurales, que están recibiendo respaldo financiero del Ministerio.

3. *La cogestión.* Después del paro general de 2002-2003, los presidentes de dos federaciones de trabajadores petroleros (Rafael Rosales y Nelson Núñez) fueron escogidos para representar a los empleados en la junta de directores de Pdvsa. Aunque en Venezuela la representación laboral en las directivas de compañías estatales se remonta a un decreto de 1966, a través de los años la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) casi siempre escogió representantes que no tenían experiencia de trabajo o profesional en el campo, por lo que su papel en la toma de decisiones era mínimo (Ellner, 1995:277). A partir de 2005 los chavistas han hecho esfuerzos para desarrollar formas de cogestión más auténticas. En ese año, Chávez escogió al veterano izquierdista Carlos Lanz para dirigir la compañía estatal de aluminio, Alcasa, con el objetivo expreso de implementar arreglos de cogestión, que luego se aplicarían a otras compañías del Estado en la región industrial de Guayana. Lanz anunció inmediatamente que iría más allá de la representación laboral simbólica que promueve el movimiento socialdemócrata europeo, y que los empleados de Alcasa y los miembros de la comunidad participarían en la preparación del presupuesto de la compañía para el año 2006.

4. *Ocupaciones realizadas por trabajadores y expropiaciones estatales.* En los días del paro general de 2002-2003, los trabajadores tomaron varias empresas grandes y medianas, alegando que sus propietarios las habían cerrado sin pagarles las indemnizaciones por cesantía que exige la ley. Al principio el gobierno sometió el asunto a los tribunales correspondientes, pero a principios de 2005 el presidente Chávez expropió la compañía papelera Venepal, y más tarde la compañía Constructora Nacional de Válvulas, y anunció que haría lo mismo con todas las demás empresas privadas que habían cerrado. La UNT ha tenido un papel activo apoyando la toma de otras empresas en circunstancias similares por parte de los trabajadores. La confederación está investigando también una gran cantidad de casos adicionales de compañías que cumplen los requisitos para la expropiación. La UNT insiste en que varias empresas (particularmente hoteles) que sufrieron bancarota y están siendo administradas temporalmente por el organismo financiero estatal Fogade sean entregadas a los trabajadores en vez de a sus anteriores dueños. En otros casos el gobierno y los empleados han llegado a acuerdos con los propietarios, en donde el Estado proporciona ayuda para facilitar la recuperación del negocio mientras la gerencia acepta arreglos de cogestión.

5. *Distribución de tierras.* En enero de 2005, en el aniversario de la muerte del líder agrario del siglo XIX Ezequiel Zamora, Chávez anunció la aplicación del artículo 307 de la Constitución en contra del latifundismo, anunciando así la apertura de un nuevo frente. Al mismo tiempo el gobernador del estado Cojedes otorgó títulos de propiedad a campesinos que desde hacía un tiempo habían invadido una finca propiedad de una filial de la compañía inglesa Vestey Group. En abril, una reforma de la Ley de Tierras autorizó al Instituto Nacional de Tierras (INT) a realizar ocupaciones mientras los casos aún estaban en tribunales. Para fines de 2005, el gobierno había iniciado medidas para tomar posesión de veintiuna fincas grandes, entregando algunas de las tierras a cooperativas agrícolas. El gobierno llegó a un acuerdo de indemnización con una planta procesadora de alimentos propiedad de la compañía Heinz en el estado Monagas, al tiempo que se hacía cargo de silos de granos en el estado Barinas pertenecientes al poderoso Grupo Polar, presuntamente inactivos desde 2002. El principal argumento del Estado para justificar estas expropiaciones fue el artículo 107 de la Ley de Tierras que define los latifundios como fincas con menos de un 80 por ciento de productividad. Además, el INT ha presentado pruebas —que en algunos casos se remontan al siglo XIX— que refutan la autenticidad de las reclamaciones de los dueños de tierras, así como evidencias de violación de leyes ecológicas. Esta campaña es novedosa para Venezuela. La única otra reforma de la tenencia de la tierra efectiva en la historia del país fue promulgada en 1960, pero no llevó a cabo el reparto de grandes fincas privadas.

6. *Delegación de autoridad a organizaciones de la comunidad.* El 4 de febrero de 2002 Chávez dictó un decreto que autorizaba a los comités de tierras integrados por habitantes de los barrios urbanos a realizar reconocimiento de terrenos, distribuir títulos de tierras a residentes de larga data y desarrollar áreas públicas con fines recreativos. Más recientemente, comisiones de habitantes de los barrios, como por ejemplo las «comisiones de agua», han participado en la formulación y ejecución de proyectos de obras públicas en sus comunidades.

7. *Negativa a nombrar a representantes del sector empresarial para altos cargos gubernamentales encargados de la formulación de la política económica.* Desde el principio del periodo democrático moderno, en 1958, los cargos de Ministro de Finanzas, Ministro de Fomento, Ministro de Planificación y Presidente del Banco Central estaban generalmente reservados para representantes de la comunidad empresarial. Desde la renuncia de Maritza Izaguirre como Ministra de Finanzas a mediados de 1999, Fedecamaras no ha tenido representación en importantes cargos gubernamentales.

Esos y otros programas y políticas demuestran lo erróneo de dos afirmaciones sobre la presidencia de Chávez. La primera, relativa a que él es un neoliberal disfrazado de

antineoliberal, y que fue formulada por sindicalistas y centroizquierdistas de la oposición durante los primeros años del gobierno, la abordamos anteriormente. La segunda plantea que el chavismo es una vuelta a las experiencias populistas latinoamericanas de los años treinta y cuarenta. Si bien hay zonas importantes de similitud entre estos regímenes (Ellner, 2001), Chávez ha establecido nuevas metas y orientaciones, que se ven reflejadas en una diversidad de políticas y acciones.

En primer lugar, los ambiciosos programas sociales y económicos de Chávez tienen una marcada orientación a la comunidad y están destinados a incorporar áreas de los barrios marginales a la vida nacional. Por ejemplo, con la misión «Barrio Adentro» los médicos trabajan en los vecindarios y con organizaciones vecinales para promover la medicina preventiva. En el pasado pocos médicos venezolanos establecían sus consultorios en los barrios. Además, la Misión Sucre (educación de nivel universitario) y las «universidades bolivarianas» fomentan la participación estudiantil en los programas comunitarios. El gobierno también alienta la formación de cooperativas en los vecindarios donde residen sus miembros. Finalmente, los «comités de tierras» y las «comisiones del agua», establecidos en los barrios, son innovaciones de particular significación puesto que otorgan autoridad a la colectividad para la toma de decisiones. La embestida colectiva de distribución de tierras en áreas marginales contrasta tanto con las prácticas de partidos populistas del pasado como con los planteamientos de autores neoliberales. Típicamente, los gobiernos populistas ofrecían títulos de propiedad de terrenos urbanos sobre una base individual como transacción clientelista con objetivos electorales, mientras que los neoliberales aceptaban el otorgamiento de títulos de tierras a fin de apuntalar el sistema de propiedad privada (De Soto, 2000).

En segundo lugar, los programas sociales y económicos de Chávez desafían a poderosos grupos económicos en formas que los gobiernos reformistas y populistas estaban reacios a implementar. Así, la Ley de Tierras y la política de expropiación de empresas reflejan el rechazo de Chávez a la propiedad privada como un derecho absoluto sin ninguna responsabilidad social. El respeto del gobierno por la propiedad privada en circunstancias normales, al tiempo que toma tierras sin cultivar (de conformidad con la Ley de Tierras), y fábricas y plantas industriales que han cerrado, contrasta con las revoluciones socialistas de toda la historia moderna por un lado, y con los regímenes populistas radicales, por otro lado.

Además, el Estado explícitamente ha desafiado el control oligopólico en la producción y distribución de alimentos apoyando la actividad económica de pequeña escala. Por ejemplo, la cadena de mercados Mercal patrocinados por el gobierno compite con los supermercados privados, así como lo hacen las cooperativas financiadas por el Estado con

otras compañías más grandes. En otra acción que socava los intereses del sector privado, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera de Venezuela (Seniat) ha implementado el plan «evasión cero, contrabando cero», el cual duplicó los ingresos fiscales recaudados en 2004 en relación con el año anterior. A fin de sentar ejemplo, el Seniat cerró temporalmente y multó establecimientos de todos los tamaños, incluyendo McDonalds, General Motors, Eastman Kodak y Hewlett-Packard. El Seniat, que espera que la recaudación de impuestos aliviará eventualmente la dependencia de la nación de la renta petrolera, ha refutado la aseveración de que en América Latina el sistema de impuestos sobre la renta no puede implementarse nunca eficazmente debido a la resistencia de parte de poderosos intereses comerciales (Castañeda, 2001:32).

En tercer lugar, la política venezolana bajo Chávez se ha convertido en un juego suma cero, al tiempo que el discurso refleja un claro sesgo de clase. Nunca antes en la historia del país había declarado un jefe de Estado que asistir a los pobres es más importante que ayudar otros sectores de la población. Los gastos en las áreas de salud y educación como porcentaje del presupuesto nacional han crecido abruptamente, mientras que la recaudación de impuestos ha contribuido adicionalmente a la redistribución de la riqueza. Los sectores medios no han estado exentos de este cambio de prioridades. Así, asociaciones de profesores y de médicos han expresado la preocupación de que los programas de misiones, que sirven a los pobres, hayan hecho bajar los estándares profesionales y estén absorbiendo recursos a expensas de las instrucciones establecidas. Esta priorización social contrasta con el discurso de los movimientos populistas radicales de los años treinta y cuarenta, que en gran parte huían del tema del conflicto de clase (Horowitz, 1999:23) e intentaron formar alianzas que unían al sector empresarial con los trabajadores.

El modelo socioeconómico que está surgiendo en Venezuela, en el cual estructuras nuevas (tales como las misiones) coexisten con otras viejas, es costoso y su éxito depende de que los precios del petróleo se mantengan altos. A la larga, su viabilidad depende también de la erradicación de las prácticas de corrupción y del desarrollo de mecanismos eficaces para asegurar que las asignaciones masivas de recursos a las pequeñas empresas de las comunidades y de los trabajadores se usen bien. De hecho, el ala izquierdista del movimiento chavista ve la lucha contra la corrupción no solo como un imperativo moral, sino como un *sine qua non* para la actual transformación de la nación. Por otra parte, mientras el modelo venezolano dependa de la renta petrolera, tendrá una aplicabilidad limitada el resto de América Latina. Solo superando el estatus de Venezuela como economía «rentista» plagada de corrupción e ineficiencia puede el experimento chavista de la nación desarrollarse hasta ser una verdadera alternativa al neoliberalismo y posiblemente emulado en otras partes del continente.

Conclusión

Este trabajo ha intentado definir los aspectos más significativos del fenómeno Chávez y explorar sus implicaciones de largo alcance para Venezuela y América Latina. En esos términos, se han examinado las políticas, estrategias y cambios estructurales gubernamentales, a fin de percibir el perfil general de un nuevo modelo político y económico. Como se expuso anteriormente, innovaciones, novedades actividades y acciones que representan un claro rompimiento con el pasado apuntan a un modelo nuevo. Si bien algunas características de este nuevo modelo, tales como las prácticas relacionadas con la democracia participativa en su forma pura, han resultado inviables, una diversidad de programas y políticas están en etapa experimental.

El resultado final del proceso, y el grado en que este resulte factible, son de importancia trascendental para el resto de América Latina y la izquierda mundial. En primer lugar, el antineoliberalismo del gobierno venezolano representa un punto de referencia en todo el hemisferio y además desafía la noción de que en la era de la globalización no hay alternativa posible a las políticas del Consenso de Washington. En segundo lugar, el experimento venezolano tiene implicaciones en cuanto al intento de la izquierda de idear un modelo democrático, humanista y anticapitalista en medio de las secuelas de la desaparición de la Unión Soviética. El caso venezolano sirve como un correctivo al debate abstracto y estéril sobre nuevos modelos, y asegura que la discusión se arraigue en la búsqueda de soluciones factibles basadas en experiencias concretas.

En muchos aspectos el chavismo se parece a gobiernos antiimperialistas latinoamericanos tales como los de Perón y Cárdenas, que nacionalizaron industrias de propiedad extranjera y siguieron una política externa independiente. La orientación antiimperialista fue estatista por cuanto favorecía el intervencionismo gubernamental en la economía y asignaba un papel principal a los partidos políticos. La determinación de obtener el poder nacional que mostró Chávez desde el principio de su carrera política, en lugar de poner la mira en gobernaciones o gobiernos locales (como apoya el enfoque desde abajo), el realismo de sus acciones para mantenerse en el poder, y la defensa de la soberanía nacional que hace su gobierno reflejan una orientación estatista (Ellner, 2005c: 20-21). Esas prioridades son particularmente evidentes en su política exterior, que intenta promover un «mundo multipolar» como antídoto al imperialismo estadounidense. De conformidad con su enfoque de *real Politik*, Chávez ha cultivado relaciones amistosas con gobiernos de diversas orientaciones ideológicas tales como el de China, el de la Francia de Chirac y el de la España de Rodríguez Zapatero. Internamente su defensa del MVR también demuestra sus orientaciones pragmáticas y estatistas. A pesar de su ataque a la burocracia y su llamado a las bases para que hagan valer sus derechos vigorosamente, Chávez defiende la unidad

desde arriba y se niega a permitir que las acusaciones de corrupción y de oportunismo partidista lleguen al extremo de debilitar las posibilidades electorales del MVR.³

Muchos de los rasgos novedosos del fenómeno chavista, tales como los numerosos créditos otorgados a las cooperativas, la asistencia para la cogestión y los programas de misiones, contribuyen a la participación en la toma de decisiones y a la sensación de empoderamiento de obreros urbanos, trabajadores agrícolas y habitantes de los barrios, y en ese sentido se ajustan al enfoque «desde abajo». La distancia entre las bases del movimiento chavista y el partido gobernante, como lo muestran las agudas críticas de las primeras contra el último, también concuerda con el enfoque «desde abajo» y no tiene paralelo en situaciones de transformación radical en América Latina. Además, las continuas movilizaciones de masas, que han sido esenciales para la supervivencia política de Chávez, tienen pocos equivalentes en la historia del continente. Algunas de las movilizaciones chavistas contrastan con las acciones controladas desde arriba del populismo radical (Collier y Collier, 1991:197) y están particularmente en armonía con el modelo «desde abajo»; así, por ejemplo, las tomas de compañías durante el paro general de 2002-2003 fueron el resultado de iniciativas de los trabajadores, mientras el gobierno solo vino a definir su posición dos años después con la expropiación de algunas de esas empresas.

La tesis de que desde 1998 la política venezolana se ha caracterizado por una relación caudillo-masas entre Chávez y sus seguidores debe ser evaluada contrastándola con los rasgos sobresalientes del chavismo, tal como los discutimos anteriormente. La tipificación de Chávez como un caudillo recuerda lo que escribía hace medio siglo Gino Germani, quien veía a la masa de los movimientos populistas como susceptible de manipulaciones demagógicas (Germani, 1978:153:208). De hecho, durante los primeros años del gobierno de Chávez los medios de comunicación recurrieron a estereotipos negativos, retratando a los chavistas de clase baja como «hordas». Algunos autores señalan la influencia en Chávez del teórico argentino Norberto Ceresole, quien glorifica la relación directa entre un dictador militar nacionalista y sus seguidores, en ausencia de organizaciones intermedias (Steger, 2002:100-103). Sin embargo, esas caracterizaciones no toman en cuenta la actitud altamente crítica que tiene la masa chavista hacia sus dirigentes ni que muchos de ellos niegan ser chavistas «incondicionales» (Seawright y Hawkins, 2004). Por otra parte, los chavistas que representaban una tendencia militarista dentro del movimiento fueron expulsados durante los primeros años. Ceresole mismo fue virtualmente declarado *persona non grata* en 1999 a raíz de sus ataques a los partidos políticos en general, y posteriormente se convirtió en un acerbo crítico de Chávez. Poco después, una tendencia dentro del

³ Por ejemplo, en septiembre de 2005 Chávez defendió el despido del canal estatal Venezolana de Televisión de un prominente presentador, Walter Martínez, que había atacado duramente la corrupción y oportunismo dentro de las filas del chavismo.

chavismo expresada por varios compañeros de armas (encabezados por Francisco Arias Cárdenas) del golpe de Estado liderado por Chávez en 1992, sostenía que los militares eran más confiables y disciplinados que los políticos, y abandonó las filas del chavismo para unirse a la oposición.

Los enfoques estatista y «desde abajo» no son contradictorios en sí, pero a menudo están cargados de tensión. Esta relación es particularmente evidente en el área de la política exterior. Por una parte, los éxitos diplomáticos del gobierno de Chávez son posibles gracias a su tolerancia hacia, y relaciones amistosas con, jefes de Estado de posiciones ideológicas muy diferentes. Por otra parte, la fiera retórica de Chávez a favor del cambio revolucionario y su glorificación del Che Guevara y otros héroes revolucionarios han generado un respaldo generalizado entre activistas de movimientos sociales, de la izquierda y de la población en general a lo largo de América Latina, de acuerdo con la estrategia desde abajo. Muchos de los activistas de movimientos sociales de Brasil y Argentina que han asistido a festivales y foros patrocinados por el gobierno en Venezuela y que participaron en el Foro Social Mundial en Porto Alegre y la manifestación anti-ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en Mar del Plata, donde Chávez habló mientras se celebraba la Cuarta Cumbre de las Américas (en noviembre de 2005), son fervientes opositores de Lula y Kirchner, respectivamente. En forma similar, los esfuerzos de Chávez para construir el MVR (enfoque estatista) están reñidos con su llamado a sus seguidores para que rechacen los controles burocráticos y por una «revolución dentro de la revolución» (enfoque desde abajo). La supervivencia política de Chávez ha dependido de su habilidad para mantener el apoyo activo de los militantes de su movimiento —muchos de los cuales son altamente críticos frente a todos los partidos políticos— sin socavar el MVR y sus aliados.

Aunque alcanzar ambos objetivos parece algunas veces un delicado acto de equilibrio, la coexistencia de los dos enfoques es lo que ha definido el chavismo y explicado sus éxitos políticos. En el frente socioeconómico, el gobierno implementó políticas novedosas compatibles con la estrategia desde abajo, pero también contradujo esa orientación con acciones que apuntan en la dirección contraria. Así, al tiempo que promueve programas de misiones y cooperativas de trabajadores (enfoque desde abajo), Chávez abre el diálogo con la federación empresarial Fedecamaras y en octubre de 2005 propuso una «alianza estratégica» con grandes grupos económicos del sector privado. Ese mismo mes planteó la posibilidad de nacionalizar la compañía del acero de propiedad extranjera Sidor (de acuerdo con el enfoque estatista). En síntesis, después de siete años en el poder, el chavismo ha empleado una combinación de los enfoques «desde abajo» y estatista en el frente económico y en el de la política exterior, sin indicaciones de un cambio significativo a favor de uno u otro modelo en el futuro a corto o mediano plazo.

Referencias bibliográficas

- Blanco, Carlos** (2002). *Revolución y desilusión: Venezuela de Hugo Chávez*, Madrid, Catarata.
- Castañeda, Jorge** (2001). «Mexico: Permuting Power» (entrevista), *New Left Review* 7, pp. 17-41.
- Colliers, Ruth Berins y David Collier** (1991). *Shaping the Political Arena*, Princeton, Princeton University Press.
- De Soto, Hernando** (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Nueva York, Basic Books.
- Ellner, Steve** (1995). *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático (1958-1994)*, Caracas, Editorial Tropykos.
- Ellner, Steve** (2001). «The Radical Potential of Chavismo in Venezuela: The First Year and a Half in Power», *Latin American Perspectives* 28, n° 5, pp. 5-32.
- Ellner, Steve** (2003). «El sindicalismo frente al desafío del chavismo», en S. Ellner y Daniel Hellinger, eds., *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Ellner, Steve** (2005a). *Neoliberalismo y antineoliberalismo en América Latina: el debate sobre estrategia*, Caracas, Editorial Tropykos.
- Ellner, Steve** (2005b). «The Emergence of a New Trade Unionism in Venezuela with Vestiges of the Past», *Latin American Perspectives* 32, n° 2, pp. 51-71.
- Ellner, Steve** (2005c). «Venezuela: Defying Globalization's Logic», *Nacla: Report on the Americas* 32, n° 2, pp. 20-24.
- Evers, Tilman** (1985). «Identity: The Hidden Side of New Social Movements in Latin America», en David Slater, ed., *New Social Movements and the State in Latin America*, Amsterdam, Cedla.
- García-Guadilla, María Pilar** (2003). «Sociedad civil: institucionalización, fragmentación, autonomía», en S. Ellner y Daniel Hellinger, eds., *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Germani, Gino** (1978). *Authoritarianism, Fascism, and National Populism*, New Brunswick, NJ., Transaction Books.
- Hardt, Michael** (2002). «Porto Alegre: Today's Bandung», *New Left Review* 14, pp. 112-118.
- Hardt, Michael y Antonio Negri** (2004). *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, Nueva York, Penguin Press.
- Horowitz, Joel** (1999). «Populism and its Legacies in Argentina», en Michael L. Conniff, ed., *Populism in Latin America*, Tuscaloosa, University of Alabama Press.
- Laclau, Ernesto** (1985). «New Social Movements and the Plurality of the Social», en David Slater, ed., *New Social Movements and the State in Latin America*, Amsterdam, Cedla.
- Lara, William** (2005). *MVR: De aparato electoral a partido político orgánico*, Caracas, s/e.
- López Maya, Margarita** (2003). «Hugo Chávez Frías: su movimiento y presidencia», en S. Ellner y Daniel Hellinger, eds., *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Parker, Dick** (2005). «Chávez and the Search for an Alternative to Neoliberalism», *Latin American Perspectives* 32, n° 2, pp. 39-50.
- Schönwälder, Gerd** (2002). *Linking Civil Society and the State: Urban Popular Movements, the Left, and Local Government in Peru, 1980-1992*, University Park, PA., Pennsylvania State University.
- Seawright, Jason y Kirk Hawkins** (2004). «Organizing Civil Society in Venezuela: A Study of the Círculos Bolivarianos», ponencia presentada al Congreso de la Latin American Studies Association, octubre, Las Vegas, Nevada.
- Steger, Manfred B.** (2002). *The New Market Ideology: Globalism*, Lanham MA, Rowman & Littlefield.

Touraine, Alain (1971). *The Post Industrial Society, Tomorrow's Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society*, Nueva York, Random House.

Wainwright, Hilary (2003). *Reclaim the State: Experiments in Popular Democracy*, Londres, Verso.

Wilpert Gregory (2003). «Will Chávez' Project Survive?», en G. Wilpert, ed., *Coup against Chávez in Venezuela: The Best International Reports of What Really Happened in April 2002*, Caracas, Fundación Venezolana para la Justicia Global.